

NOMENCLATURA : 1. [40] SENTENCIA.
JUZGADO : 2° JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ANTOFAGASTA.
CAUSA ROL : C-1.702-2.022.
CARATULADO : LAYZA/HIPERMERCADO TOTTUS S.A.
MATERIA : ORDINARIO MAYOR CUANTÍA. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.
CÓDIGO : [I03A]
DEMANDANTE : ELVA NELLY LAYZA BLAS
R.U.T. : 21.611.724-7
DEMANDADO 1 : LIDERMAN SPA.
R.U.T. : 96.984.150-9
DEMANDADO 2 : HIPERMERCADO TOTTUS S.A.
R.U.T. : 78.627.210-6
FECHA INICIO : 06.07.2022

Antofagasta, a dos de febrero del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que a folio 01 del cuaderno principal, comparece doña Isabella Bravo Pérez, abogada, en representación de doña **Elva Nelly Layza Blas**, peruana, soltera, técnico en administración de empresas, ambas con domicilio en calle Prat N°461 piso 15 oficina 1507, Antofagasta, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de **Liderman SpA.**, del giro de servicios de seguridad, representada legalmente por don **Ricardo Monosalva Mena**, chileno, ignora profesión, Cédula Nacional de Identidad N°7.977.229-1, ambos con domicilio en calle Manquehue Sur N°944, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y solidariamente en contra de **Hipermercados Tottus S.A.**, giro supermercados, representada legalmente por don **Pedro Ignacio Zarate Pizarro**, chileno, ingeniero, Cédula Nacional de Identidad N°13.333.067-4, ambos con domicilio en calle Nataniel Cox N°620, comuna de Santiago, Región Metropolitana.



Funda su demanda en que el día 20 de junio de 2022 a las 10:30 horas su representada acude al supermercado Tottus Antofagasta, ubicado en calle Condell N°2639, Antofagasta, con la finalidad de realizar las compras respectivas para su empresa, ya que el rubro de doña Elva es ser microempresaria en la ciudad de Antofagasta, manteniendo locales de presentación de servicio alimentarios (restaurantes), por lo tanto, se abastece diariamente de mercadería en el supermercado de referencia. Agrega que, en ese contexto, acude a la caja para realizar el pago de sus compras, y en ese instante su cliente le informa a la cajera que lleva un pack de 11 paquetes de arroz, no obstante esa información, la cajera le indica que no es necesario que "pase o suba" todos los paquetes en la cinta de la caja, ya que basta un paquete y ella marca que son 11 en total; terminada la gestión, su representada procede a pagar por un total de \$156.254.- pesos.

Expone que, posterior a ello, coloca todas sus pertenencias en el carro y acude a la salida del supermercado por calle Condell, ya que en ese sector al exterior del supermercado se encuentran personas que por una cantidad de dinero ayudan a cargar la mercadería y a gestionar taxis en caso de que una persona lo necesite para el traslado de las compras, situación que su mandante ya había coordinado con anterioridad con un joven que siempre le colabora por la gran cantidad de mercadería que debe comprar, y además, porque su representada, atendida su edad y problemas de salud en su pierna, no puede con el peso de todas las bolsas.

Alude que en ese momento ella se detiene en la salida del supermercado, a solicitud del guardia de seguridad por supuesto y al tratarse de una clienta frecuente del local, la demandante tiene pleno conocimiento que debe exhibir la factura de la compra, en ese contexto exhibe el documento



al funcionario, quién al revisar le consulta: ¿señora cuántos arroz lleva?, ante tal pregunta su representada le indica: "joven no recuerdo muy bien, pero creo que son 11 paquetes en total.". Cuando le entrega esa información, el guardia le señala: "lo que sucede es que en la factura solo aparece pagado un paquete". La Sra. Elva le contesta al guardia de seguridad que ella le informó a la cajera que eran 11 paquetes de arroz en total y que lo más probable es que sea un error de la funcionaria, que no existe problema en regresar a la caja y rectificar la factura y pagar los restantes paquetes.

Refiere que, acompañada del guardia de seguridad, acude a la caja, momento en la cual la cajera le indica: "Señora me equivoque espere un momento mientras termino de atender a una persona y procederé hacer la boleta por los restantes paquetes de arroz"; a la espera de que la cajera terminara de atender y procediera a emitir la factura por lo restante y así continuar con el pago, en ese momento, y sin comprender el motivo, la actora comienza a escuchar los radios de los guardias de seguridad, quienes se comunicaban y decían a viva voz "hay una peruana que está robando arroz", todo de manera muy agresiva y peyorativa; las personas que estaban en la caja comenzaron a mirar a su mandante, incluso algunas personas que estaban comprando en la misma caja señalaban "que raro que digan eso de la casera si ella es conocida acá, siempre compra para su restaurante".

Indica que en ese instante se presenta una persona, al parecer la jefa de caja, quien comienza a retar a la funcionaria diciéndole: "debes tener más cuidado levantarte y revisar el carro al momento de pasar las cosas, no puedes equivocarte al cobrar un producto, ahora por eso tendremos que procesar de inmediato a la señora por hurto"; su representada quedó estupefacta al escuchar lo que se estaba



diciendo, no podía creer que por un error de la cajera en el cobro de un producto estuvieran hablando de "hurto", en ese momento varios guardias se acercan a ella y le dicen "señora por favor debe acompañarnos no coloque resistencia o tendremos que llevarla a la fuerza"; por temor a lo que estaba pasando y la angustia que sentía, decide caminar con los guardias de seguridad. También alega que ella sentía temor de que pudieran aplicar fuerza en su persona, lo que afectaría su estado de salud y su lesión en la pierna.

Comenta que, angustiada y con mucho miedo, le indica a los dos guardias que la estaban acompañando que todo era un error, que ella era microempresaria en la ciudad, que siempre iba a comprar a dicho supermercado, incluso les exhibe su cédula de identidad y los documentos del servicio de impuestos internos para realizar las respectivas compras con facturas, que jamás ha tenido la intención de robar nada, que sería una tontería ya que ella sabe que debe exhibir la factura a la salida del supermercado como siempre se hace, y además, ella es una persona mayor, con una lesión en su pierna, y que acude permanentemente a dicho establecimiento a comprar lo necesario para sus locales de comida. Prosigue al relatar que con todo el temor, ella les precisa a los guardias de seguridad "no voy a ensuciar mis papeles siendo extranjera y microempresaria si fuera así no podría entrar más a Chile, no voy a ensuciar mis papeles por unos paquetes de arroz". La respuesta del guardia de seguridad fue que guardara silencio y que no se preocupara, que iban a subir a una oficina privada para conversar con el encargado del local o con el administrador del recinto, para aclarar la situación, que no opusiera ninguna resistencia o sino tendría que aplicar la fuerza.

Relata que al momento de llegar a una oficina, su mandante se percata que es un lugar oscuro y sucio, lleno



de cartones y basura, le pregunta al guardia de seguridad: ¿esta es la oficina del administrador del supermercado?, el guardia le contesta que no, que debe estar tranquila, ya que el administrador va acudir a conversar con ella en ese lugar, la demandante quedó extremadamente afligida, ya que estaba sola en una especie de "calabozo" sucio, de mal olor y además por su edad y lesión en la pierna necesitaba sentarse, lo que le fue negado por los guardias del recinto. Transcurrido un tiempo, su representada le insiste al guardia que por favor le faciliten una silla para poder sentarse, ya que no soportaba el dolor de la rodilla (producto de su lesión), ante lo cual los guardias comienzan a mofarse de ella y a decirle que debe esperar quieta y sin moverse, que el "administrador del local" en uno 30 minutos más iba a bajar para conversar con ella, que se estuviera "tranquilita", todo siempre con un tono burlesco.

Explica que su representada comienza a preocuparse aún más, cuando se percata que el tiempo pasa y que le habían solicitado a ella sus documentos (cedula de identidad), incluso en un momento una guardia de seguridad le lanza el documento por la rejilla entre los barrotes y le dice "ahí tienes peruana", la actora se encontraba totalmente afligida y con mucho dolor en su pierna. Transcurrido casi dos horas encerrada en el calabozo, comenzó con una crisis de pánico y angustia, golpeaba la puerta para pedir ayuda pero nadie acudía, solo atinó a llamar al call center nacional del supermercado, siendo contestada por una operadora del establecimiento, quién le indica no poder creer lo que estaba ocurriendo, sobre todo que estuviera encerrada en una especie de calabozo, otorgándole el número directo de la tienda de calle Condell para que pudiera llamar o comunicarse con alguien que fuera en su ayuda.



Refiere que doña Elva, siempre con mucha angustia, llama al número telefónico que le fue entregado siendo atendida por un hombre quién le refirió que ya tenía conocimiento de su caso, que debía esperar encerrada mientras llegaba Carabineros, en ese momento ya llevaba casi 3 horas sin poder ir al baño, sin salir y sin poder descansar de su lesión en la pierna. Al pasar el tiempo, y con un profundo dolor en su pierna, su representada se percata que llega Carabineros al lugar, siendo entrevistada por el funcionario policial, quién le indica que el supermercado había puesto una denuncia en su contra por hurto y que ellos solo venían a hacer el procedimiento. La demandante le explicó a los funcionarios policiales la situación, y ellos la ayudaron a trasladarse desde el calabazo en que estaba encerrada hasta el auto patrulla que la esperaba afuera de la tienda, siendo observada por todas las personas que en ese momento estaban en el local comercial y también por los transeúntes, debiendo agachar su cabeza por vergüenza y por miedo, todo sumado al fuerte dolor que mantenía en su pierna.

Menciona que en la Comisaria de Carabineros le revisan sus cosas, ella llevaba en su bolso una cantidad de dinero, alrededor de \$800.000.-, porque debía ese mismo día acudir a pagar el sueldo de sus trabajadores y proveedores, además de abastecerse de mercadería para sus locales. Era evidente que siendo una persona mayor y enferma, que iba con todos sus documentos legales de comerciante y dinero en su poder, nunca existió en ella ninguna intención de cometer hurto, no obstante aquello, debió ser sometida a un encierro arbitrario en un espacio sucio, con mal olor, sin poder descansar, sufriendo por su enfermedad en la pierna, todo por un error de una cajera y además por la absoluta falta de criterio de los profesionales de la empresa de seguridad y de los encargados del supermercado.



Relata que hasta el día de hoy su representada se encuentra con tratamiento psicológico y psiquiátrico producto del daño ocasionado, jamás había estado sometida a una situación de esa envergadura, además, ha debido someterse a controles con sus médicos y profesionales tratantes, ya que su lesión a la pierna se vio afectada producto de las largas horas de espera y sin poder sentarse. Concluye que todo ello mantiene a la Sra. Elva Layza con un trastorno por estrés post traumático por todo lo vivido y la vergüenza que sufrió con una afectación directa a su honra.

Señala que, en cuanto a la responsabilidad de las empresas demandadas por los hechos reseñados, el artículo 2322 del Código Civil prescribe que los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto, aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista. En este entendido, y obviando la fraseología anticuada utilizada por el articulado legal, la norma se refiere a los ilícitos civiles cometidos por los dependientes en el ejercicio de sus funciones, asignando responsabilidad a los empleadores por el hecho ajeno. En la especie, la empresa de seguridad Liderman SpA e Hipermercados Tottus S.A., deben responder por el hecho ilícito de sus dependientes, al prestar un servicio en abierta negligencia y discordancia con las prácticas profesionales y procedimientos en materia de seguridad privada que disponen los establecimientos comerciales objeto de esta demanda, y que, además, la falta de aplicación de criterios, habría permitido a todas luces aclarar tal mal entendido, evitando la enorme denostación, humillación y daño a su imagen, honra y dignidad sufridos por su mandante, todo lo cual ha derivado en la generación de una severa afectación de su estado emocional, psicológico y espiritual. Procede a citar los artículos



2314, 2320 y 2329 del Código Civil. En definitiva, sostiene que existió por parte de las empresas demandadas una serie de deficiencias en sus mecanismos y directrices de control y supervisión del trabajo realizado por los guardias de seguridad, que permitieron, en definitiva, la ocurrencia y concreción de los hechos demandados en el caso de marras.

Imputa a Hipermercados Tottus una deficiente contratación, no cumpliendo los estándares mínimos de supervisión y control como origen del daño sufrido, pues fue negligente en la supervisión y control de las funciones que ejercía la empresa de seguridad personificada en uno de sus empleados, lo que permitió que se concretara la gratuita vulneración de sus derechos y el enorme daño psicológico y emocional sufrido, en dependencias de su establecimiento comercial. Esta falta de control y supervisión culminó con el incidente de autos, en el que la empresa en una actitud negligente no veló por que los procedimientos de control y supervisión se cumplieran durante su desarrollo empresarial, en especial del personal contratado en un área tan sensible como la seguridad privada, pues deben ser personas idóneas y con un particular perfil psicológico, a la luz del buen trato y el respeto irrestricto a las leyes y los derechos de sus clientes.

Seguidamente, transcribe pasajes de doctrina nacional, y argumenta que en esta acción principal indemnizatoria, su parte les imputa a los demandados un actuar culpable como causante del daño sufrido. Si bien en el libelo realizan imputaciones concretas del actuar de la seguridad privada proporcionada por Liderman SpA., es evidente que prestan servicios al establecimiento comercial Hipermercados Tottus, y están bajo su dependencia y supervisión en dicha prestación de servicios. Cita el artículo 15 de la Ley del Consumidor, e indica que dicha norma ha puesto especial



énfasis en la responsabilidad del establecimiento comercial, ya que la actividad particular pone en juego derechos fundamentales del ciudadano, como son la honra, la dignidad y la libertad.

En cuanto a la naturaleza y cuantía de los daños causados, menciona que es evidente que, a causa de los hechos narrados, la actora ha sufrido graves padecimientos que se han manifestado tanto física, psicológica y espiritualmente. La recuperación ha sido lenta, y está sumergida en un estrés post traumático que incluso ha afectado gravemente su vida familiar, que hoy los ha llevado a estar en tratamiento psicológico y psiquiátrico, como se acreditará en su oportunidad. Por estas razones, se demanda la suma de \$35.000.000.- de pesos, a título de daño moral.

Precisa que el daño extrapatrimonial modernamente ha sido conceptualizado por la doctrina como "la lesión, pérdida o menoscabo de un bien puramente personal no susceptible de evaluación o tráfico económico", concepto que no sólo está referido a la existencia de perturbaciones sicofísicas, que generalmente existen, por lo que su aceptación parece más justa y equitativa, ya que permite la aplicación de la reparación de este daño a un espectro más amplio de personas y/o bienes lesionados, con una compensación que neutralice o atenúe el dolor ocasionado, la que normalmente es de carácter económico.

En lo que respecta a la relación de causalidad, indica que es innegable que el daño producido se debió exclusivamente al actuar del personal de seguridad privada, cuyos servicios son prestados por el demandado Liderman SpA., en dependencias del demandado Hipermercados Tottus S.A., bajo su tutela, dependencia y supervigilancia, debiendo éste, en definitiva, velar porque el personal contratado para dichas labores cumpla con un estándar en



sus procedimientos, protocolos, además de todas las exigencias legales para poder ser investidos como guardias privados, tanto en el área psicológica como formal. Arguye que ninguno de los profundos padecimientos físicos y morales que ha experimentado su mandante se habría provocado, si no mediara la negligencia de la empresa demandada y que se tradujo en la falta de personal suficientemente capacitado, pues no es posible sostener que la seguridad privada actuó con apego a las leyes y a los procedimientos de seguridad, pues su defendida no cometió delito alguno para ser aprendida, y bastando una simple explicación para ser resuelta la confusión de lo sucedido, faltando evidentemente la aplicación de criterio de parte del guardia de seguridad, alejándose en su conducta del deber de protección y respeto a derechos fundamentales de los ciudadanos como la honra, la dignidad y la libertad personal.

Plantea que el riesgo es creado por el propio demandado, por su deficiente regulación y control, al no supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos de contratación de personal de seguridad. Creó voluntariamente el riesgo que produjo el daño reclamado. No existió ningún control del trabajo realizado por el guardia de seguridad que ejercía sus funciones en dependencias de la demandada. Reitera que si bien es sabido que Hipermercados Tottus externaliza sus servicios de seguridad, y que la conducta y omisiones fueron ejecutadas por un empleado de dicha empresa externa de seguridad, la demandada no puede evadir su responsabilidad solidaria en los daños reclamados, pues dichos daños fueron ocasionados en dependencias de su comercio y por guardias de seguridad que están bajo su control, supervisión y tutela. Alega que, para que una persona quede obligada a indemnizar perjuicios, no basta que exista daño y que haya un acto doloso o culpable por



parte del agente, es preciso además que el perjuicio sea por causa directa y necesaria del hecho doloso o culpable del autor, de manera que sin su concurrencia no se habría producido tal menoscabo. Argumenta que los actos dolosos o culpables del demandado son los únicos que han producido los daños que se reclaman en este libelo.

Concluye que, de haber mediado un procedimiento acorde a los estándares exigidos por nuestra legislación, se habría evitado todo el sufrimiento, aflicción espiritual, daño físico, sociológico y espiritual que la actora ha tenido que padecer todo este tiempo. En la especie, su parte sostiene que la simple apreciación de los hechos narrados, permiten inferir la aflicción espiritual y psicológica que ha infringido a su representada y su familia, circunstancia que se ha traducido en sentimientos de ansiedad, angustia, estrés e inseguridad, que ha transmitido a su núcleo más cercano.

Solicita tener por interpuesta demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, en contra de Liderman SpA., y solidariamente, en contra de Hipermercados Tottus S.A., todos ya individualizados, acogerla en todas sus partes, con costas, declarando que: 1.- Los demandados han inferido daño a su representada, como consecuencia de un mal y erróneo procedimiento de seguridad practicado por los guardias privados de seguridad, resultando en agresiones físicas y verbales, apremios ilegítimos, afectando en proporciones su dignidad, su honra, su libertad, y su imagen; 2.- Que con cargo a dicho daño, procede indemnización de perjuicios en favor de su representada en la forma de daño moral, en la suma de \$35.000.00.- de pesos o la suma que el tribunal estime pertinente fijar; 3.- Que las sumas referidas en el N°2 anterior, deben pagarse reajustadas con la variación del Índice de Precios al Consumidor o el índice que lo



reemplace, entre la fecha de la dictación de la sentencia de primera instancia y el pago efectivo, o el reajuste y fechas que S.S. estime conforme al mérito de autos; y 4.- Que la sociedad demandada debe pagar las costas de la causa.

A folio 08 compareció don Héctor Solano Pironi, abogado, en representación de la demandada solidaria **Hipermercados Tottus S.A.**, quien procedió a **contestar la demanda de autos**, rechazando y controvirtiendo de manera total las aseveraciones fácticas indicadas en el libelo.

En cuanto a la responsabilidad extracontractual compleja, refiere que se ha demandado a su representada como tercero civilmente responsable. Arguye que, en la hipótesis que lo fuera, la responsabilidad únicamente sería efectiva en la medida que la demandada no hubiese tomado todas las medidas de seguridad que le correspondieren; en este sentido, los guardias de la empresa externa poseían idoneidad, experiencia, y altos estándares para el desempeño de su función, asimismo, la empresa de seguridad para la que trabajan. Añade que para la pretensión procesal de la actora, necesariamente debe acreditarse que su mandante ha incurrido personalmente en una culpa al elegir, vigilar, dirigir o controlar a los trabajadores que directa o inmediatamente causaran el daño respectivo. Además, el responsable puede eximir su responsabilidad probando que en los hechos le ha sido imposible evitar la ocurrencia del hecho dañoso. En consecuencia, mal podría haber evitado su defendido los supuestos hechos imputados, si aun siendo empleador, cuyo no es el caso, si cumplía con todas las normas de prevención, y seguridad, que la ley establece.

Asevera que en nuestra legislación se ha establecido como regla general, que sólo se responde por el hecho propio, por excepción se responde por el hecho realizado por terceras personas o por las cosas. Es así, que todas



las normas que regulan la materia, son normas excepcionales, de interpretación estricta, donde no se admite analogía. En términos generales, y en los casos especialmente sancionados por el Código Civil, el fundamento de la responsabilidad se funda en la culpa de la persona que tiene a otra a su cuidado y abandona su vigilancia. Tanto es así, que el responsable puede eximir su responsabilidad probando que en los hechos le ha sido imposible evitar la ocurrencia del hecho dañoso.

Refiere que los requisitos para que proceda este tipo de responsabilidad, varían dependiendo de los autores que se consulte, no obstante, la mayoría concuerdan lo siguiente: 1.- Que exista vínculo de subordinación y dependencia entre dos personas y que se acredite; 2.- Que ambas personas (hechor y responsable) tengan capacidad extracontractual; 3.- Que el hechor haya cometido un hecho ilícito, concurriendo todos los requisitos del mismo.

Expone que respecto del vínculo de subordinación y dependencia entre dos personas, corresponde a una correlación de autoridad, por una parte, y de obediencia, por otra. Nuestros Tribunales han señalado que se debe tener necesariamente una autoridad y superioridad respecto de la persona por la cual se responde. En los casos que se encuentran regulados especialmente por la ley, se presume el requisito de subordinación o dependencia, en los demás deberá probarse la existencia del mismo. En este caso, no concurre el requisito en cuestión, pues existe independencia funcional. La mayoría de la doctrina señala que la responsabilidad por hecho ajeno no es tal, sino que se responde por el hecho propio culposo, que consiste en no faltar a un deber de cuidado. Es necesario e imprescindible que se tenga una autoridad y se puedan dar órdenes al tercero hechor, cuyo no es el caso de autos, al ser los



guardias por los que se reprocha, personal de la codemandada. Transcribe doctrina nacional en dicho sentido.

A continuación, manifiesta que es lógico que el hechor se encuentra obligado a cumplir con las ordenes que le dé su superior, ya que en esto se basa la responsabilidad del superior jerárquico, la única forma de incumplir el deber de cuidado, es teniendo la posibilidad clara y verdadera de intervenir en el actuar del hechor de una manera correctiva. En cuanto a la prueba de la responsabilidad del subordinado o dependiente, la ley establece una presunción simplemente legal de la responsabilidad del tercero civilmente responsable, mas no una del hechor, respecto del cual deberá probarse, por los medios legales, que concurren todos y cada uno de los requisitos de responsabilidad extracontractual. Ahora bien, la presunción antes dicha puede destruirse, probando que no hubo culpa de su parte, es decir, que no obstante su autoridad y el cuidado que empleó, no pudo impedir el hecho, tal cual se norma en el inciso final del artículo 2320 de Código Civil. Basta que se acredite que ejerció la debida diligencia, valiéndose de toda la autoridad que su situación le confería y empleando todo el cuidado que ella le prescribía. En otras palabras, que realizó todo lo que normalmente le es posible para evitar el daño.

Respecto a la inexistencia de acto ilícito, arguye que según confiesa judicial y voluntariamente la demandante, con fecha 20 de junio del año 2022, a las 10:30 horas concurrió al local de su mandante ubicado en calle Carlos Condell N°2639, de esta ciudad, donde traspasó la línea de cajas con su carro, en el que contenía productos que no habrían sido pagados. Añade que, en este escenario, sin perjuicio de la negación de los hechos antes expuesta, es necesario revisar - desde el relato de la contraria - si sería posible percibir, para los encargados de seguridad,



elementos objetivos que den razonabilidad al inicio de un procedimiento. Todo esto, de acuerdo a los dichos de la demandante, quien confiesa haber traspasado la línea de cajas, teniendo en su poder bienes seleccionados por ella y no pagados. Así, prescindiendo del ánimo, el caso es determinar si estamos ante hechos que permitían pensar fundadamente que se podría haber configurado un ilícito, existiendo, en consecuencia, legitimación para actuar con el objeto de poner a quien lo cometiera a disposición de la autoridad policial.

Específica que, para efectos de establecer si el inicio del procedimiento fue razonable, o por el contrario arbitrario o ilegal, se debe analizar si en la acción objetiva, es decir, aquella perceptible por los sentidos, prescindiendo del factor subjetivo de intencionalidad, permite determinar si se estaría ante los presupuestos objetivos o perceptibles del hurto falta del artículo 494 bis del Código Penal, que justifiquen la supuesta detención por flagrancia que señala. Respecto de ese tipo de falta, la Excelentísima Corte Suprema ha adoptado la teoría de la disponibilidad, considerando que un hurto falta se encuentra consumado una vez que se traspasa la línea de cajas sin pagar el valor del producto, aunque sea por un momento. Para respaldar sus dichos, cita los fallos de la Excelentísima Corte Suprema en el proceso rol 5125-2005, 889-2006, y las sentencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción rol 55-2013 y 131-2013, como también de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rol 2404-2014.

Prosigue al analizar que en este tipo de casos, cuando el procedimiento es injustificado, Carabineros no detiene al cliente, y cuando existen agresiones, los guardias de seguridad son detenidos. En consecuencia, inequívocamente de los hechos objetivos descritos en la demanda, existirían



elementos suficientes para pensar que se estaba frente a un hecho que coincide con la descripción típica del hurto falta, por lo que el inicio del procedimiento se encontraría fundado. Hace presente que en estas situaciones, hay primero una molestia o resistencia de la persona que es sorprendida y que, para poder cumplir con lo previsto en el inciso segundo, junto con llamar en tiempo razonable a Carabineros, se debe esperar a que la autoridad se haga presente en el local, lo que obviamente no es instantáneo, además, mantener a la persona en el local para el solo efecto de ponerla a disposición de la autoridad. Ello nunca es sencillo, a veces - no es este el caso - la persona quiere escapar, se generan forcejeos, etc.

Comenta que en todos los casos se produce un dilema relacionado al tiempo transcurrido desde el procedimiento hasta que Carabineros llega y se puede poner a su disposición a la persona para que la autoridad proceda como lo estime conveniente, ¿Dónde se espera la llegada de Carabineros con la persona que se desea poner a su disposición?. La experiencia indica que en resguardo de la dignidad y derechos de las personas, la peor alternativa es esperar en la sala de venta, porque ahí la persona se expone a que todo el público que circula en el local la vea. Por ello, se opta a que se espere la llegada de la autoridad en forma privada, en una sala de espera que se encuentra dentro de las oficinas administrativas de local, así se resguarda la dignidad, derecho y privacidad de las personas, quienes así no se ven expuestas a encontrarse con familiares, amistades, compañeros de trabajo o jefes, evitándose la incómoda exposición e incluso posibles grabaciones por parte de terceras personas que no los conozcan.

Continúa al indicar que no cabe duda que si las esperas se dieran en las salas de venta, se reclamaría por



dicha exposición. Lógicamente, cuando hay una espera de este tipo, ninguna de las alternativas va a satisfacer a la persona que se encuentra a la espera de llegada de Carabineros, y dado que es imposible que ello sea en segundos, hay que tomar, a priori, de manera estandarizada e igual para todas las personas, la opción que resulte más armónica con su dignidad y privacidad, pues tener a la persona a la vista de todo el público es lo peor que podría hacer. Así, ante procedimientos iniciados con fundamentos razonables, y realizados procurando cautelar la dignidad, integridad y derechos de la persona que se ha detenido para ser puesta a disposición en forma inmediata de la autoridad competente, no se vislumbra infracción alguna a la ley, debiéndose, en consecuencia, al no existir ilícito civil, el que por lo demás no es determinado por la contraria, ser rechazada la demanda.

En lo tocante al tipo de responsabilidad y sus efectos en las indemnizaciones solicitadas, alude que del libelo indemnizatorio, el actor demanda a la empresa Liderman SpA, y solidariamente a Hipermercado Tottus S.A., fundándose en la supuesta responsabilidad que éste tendría respecto del actuar de guardias de seguridad. Pues bien, los guardias de seguridad no tienen dependencia laboral con su mandante, esto tiene una relevancia significativa, pues no se ha emplazado a los guardias individualizados en la demanda de autos. Tal parece que la contraria parte del presupuesto que en este pleito habría un tipo especial de solidaridad por la acción que habrían cometido, esto ya que no se les emplaza, dando por sentado que tiene una responsabilidad solidaria junto a aquellos. Sin embargo, la responsabilidad que emana de los hechos aportados al proceso, es simplemente conjunta y no solidaria, pues no existe solidaridad si las responsabilidades denunciadas son de naturaleza distintas. Luego, cita jurisprudencia en dicho



sentido, y agrega que en el recurso citado se reconoce que se persigue la responsabilidad del autor del cuasi delito de lesiones y la del empresario por el hecho de su dependiente, admitiendo que el estatuto jurídico de esta última está contenido en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil.

Expresa que se ha demandado a la empresa de seguridad, a la que supuestamente pertenecían los guardias que habrían participado en los hechos que se contiene en la demanda de autos, no obstante, para su mandante se trataría de una obligación simplemente conjunta, y no solidaria como se pretende en la demanda, lo que necesariamente debe ser declarado para el caso eventual e improbable de condena.

En cuanto a la legitimación de Hipermercados Tottus S.A., para ser demandado en este juicio, argumenta que mucho se ha discutido sobre cuál es la procedencia para que opere la norma que imputa responsabilidad al amo por los hechos de sus criados, para estos efectos debemos atender al tenor del artículo 2322 del Código Civil, y a lo señalado por los autores clásicos en la materia. Los requisitos que deben operar son: 1.- Que la persona que comete el delito o cuasidelito sea criado o sirviente, de la persona cuya responsabilidad se persigue; 2.- Que los delitos o cuasidelitos cometidos por los criados o sirvientes sean en ejercicio de sus respectivas funciones; 3.- Que la víctima sea otro criado o un tercero.

Sostiene que, conforme relata la actora, el ilícito materia de autos lo habrían cometido guardias de seguridad (trabajadores de otra empresa), por lo que para que nazca la responsabilidad civil, debió alegarse la responsabilidad de éstos, su omisión necesariamente provoca que deba ser desestimada la acción de marras.

Añade que, conforme la doctrina de la culpa in eligendo vel vigilando, el empresario sólo es efectivamente



responsable si se logra acreditar que ha incurrido personalmente en una culpa al elegir, vigilar, dirigir o controlar a su empleado que directa o inmediatamente causó el daño respectivo. El derecho entiende que el empresario, desde que contrató al dependiente y lo tiene bajo sus órdenes e instrucciones, está obligado a vigilar su conducta para que desempeñe con eficacia y seguridad en su encargo, evitando así causar daños a terceros. Así, tenemos dos requisitos copulativos: ser el empleador y vigilar el correcto desempeño de sus funciones. Colige que quien debería responder por haber elegido y contratado a los guardias de seguridad, como por vigilar que cumplieran su desempeño con eficacia y seguridad, es sin lugar a dudas la empresa de seguridad que los contrató, mas no su mandante, pues éste no tiene que ver con el giro de la seguridad, el que se encuentra fuera del ámbito de su actividad comercial.

Procede a plasmar el tradicional tratamiento que hace la doctrina nacional sobre la legitimación. Expresa que la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustantiva está legitimada para que, por sentencia de fondo, se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda; y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustantiva está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante. El demandante es quien provoca el movimiento de la jurisdicción, pide la actuación de la ley en un caso concreto, y se le denomina sujeto activo. Es necesario consignar que la legitimación procesal o *legitimatio ad causam* presenta como características que es personal, subjetiva y concreta respecto de un conflicto determinado. Ella debe existir al momento de constituirse la relación procesal respecto del demandante y del



demandado, y determina quiénes deben estar presentes en un proceso para que sea posible emitir una sentencia sobre la pretensión que se ha formulado. La falta de legitimación pasiva en la causa, debe declararse de oficio por el tribunal en la sentencia de fondo, omitiéndose pronunciamiento sobre el conflicto promovido.

Luego esgrime que, de conformidad con lo reseñado, si se deduce la acción en contra de un sujeto sin legitimación, esa petición de tutela jurisdiccional no puede prosperar. Ello, porque como ya se dijo, la legitimación tiene como único objetivo jurídico el determinar quiénes tienen la calidad de justa parte en el proceso, o sea, las personas que deben estar presentes a fin de que el juez pueda proveer sobre un determinado objeto. Si no concurre la legitimación - activa o pasiva - faltará un elemento básico para acceder a la tutela judicial, toda vez que su carencia mira al fondo de la acción deducida. La legitimación pasiva significa "frente a quien" ha de ser interpuesta la petición de tutela judicial, para que tal petición resulte eficaz subjetivamente. En tal sentido, está legitimado pasivamente el obligado frente al derecho que se hace valer mediante la pretensión procesal interpuesta. Sólo esa persona puede ser considerada como un "demandado legítimo", lo que en la situación presente no ocurre. Pues bien, no se vislumbra cómo su mandante podría ser responsable de los supuestos hechos ilícitos contenidos en la demanda civil, ya que como ha señalado, los hechos que dan origen a este pleito, habrían sido cometidos por guardias de una empresa que no tiene relación con el giro de su mandante.

En lo referido al vínculo de causalidad, indica que se entiende como el enlace que liga un hecho culposo o un incumplimiento de orden contractual con el daño causado. El vínculo causal es indispensable, por cuanto la conducta del



demandado debe ser la causa directa, necesaria y determinante del daño. Sin embargo, en el caso de marras su defendido no ha efectuado en contra de la actora, conducta alguna que permita avizorar que, entre los hechos relatados en la demanda y los supuestos perjuicios impetrados, exista algún nexo de causalidad del que pudiere hacer nacer algún tipo de responsabilidad. A mayor abundamiento, es inexistente algún vínculo de causalidad entre su mandante y alguna conducta desplegada por él, ya que como ha venido señalando, desconoce y niega los hechos descritos en la demanda.

Menciona que se debe proceder a verificar si el daño puede ser atribuible a la conducta desplegada. La doctrina civil chilena ha tratado esta exigencia a propósito del daño, expresando que sólo se indemnizan los daños directos. Que un daño sea directo, sin embargo, es precisamente una calificación relativa a la relación existente entre el hecho que da lugar a la responsabilidad y sus consecuencias dañosas mediatas. Por eso, el lugar para comprender en su debido contexto ese requisito es precisamente la causalidad. Transcribe pasajes de jurisprudencia dictada por los Tribunales Superiores de justicia. Observa que lo anterior es plenamente aplicable al caso de autos, pues no existe el vínculo de causalidad entre los hechos denunciados y el actuar del demandado solidario, ya que éste no desplegó conducta alguna que pudiese inferir injuria o perjuicios al demandante de marras. Además, los daños alegados no tienen nexo causal alguno con los hechos en virtud de los cuales se ha requerido el ejercicio de la jurisdicción por parte del actor, habida consideración de que el procedimiento se habría ajustado al estándar legal.

Además, dice que el Código Civil exige la causa como presupuesto de la obligación de reparar los daños sufridos por otra persona, en atención a lo dispuesto por los



artículos 2314 y 2329 del Código. Así las cosas, falta un requisito para que nazca la responsabilidad de su mandante ya sea contractual o extracontractual, por lo que la demanda ha de ser rechazada.

Respecto de la carga de la prueba, arguye que el artículo 1698 de nuestro Código Civil prescribe que "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta", esto no tiene otro significado más que señalar que quien alega algo distinto a lo normal es quien deberá probar en un juicio su pretensión, es decir, quién tiene la carga de la prueba es la actora, por tanto deberá ella demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Quien tiene la carga de la prueba es el actor, ya que éste, al reclamar los supuestos perjuicios, afirma la existencia de una obligación, para lo cual deberá acreditar que concurren los requisitos legales para que tenga lugar la responsabilidad extracontractual, uno de los cuales es la culpa o dolo. Por tanto, deberá demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

Asegura que los hechos y los supuestos perjuicios sufridos son poco creíbles, y sin lugar a dudas para que sea acogida la acción intentada, han de ser probados. Más aún, debe acreditar la existencia indubitada de los perjuicios que alega, además de justificar la cuantía de éstos, ya que no se trata de lanzar cifras dinerarias al voleo para impetrar indemnizaciones fuera de toda seriedad, pero más importante aún ha de acreditar el vínculo de causalidad entre los hechos que denuncia y los perjuicios reclamados, como también que se trató de una acción desplegada por un empleado de su mandante y que se encontraba esta acción dentro de un acto del servicio, cosa que en la especie no ocurre. Recuerda que es necesario que la víctima pruebe la culpa y la responsabilidad de la persona subordinada, como también que el dependiente haya



obrado en el ámbito de la relación o vínculo que lo liga al empresario.

Respecto de los perjuicios reclamados, critica que la demandante solicita una condena por la suma de \$35.000.000.-, cifra que además de basar en hechos sesgados, resulta en sí misma absolutamente desproporcionada, sin fundamento; ello aún en el supuesto teórico que existiera efectivamente negligencia de su parte que la hiciera responsable de perjuicios. Además, no indica debidamente en qué consiste el daño que alega, sólo lo enuncia de forma general. Tampoco precisa cómo determina o estima la millonaria suma que demanda. Arguye que, aparte de deber probar cada uno de los fundamentos del daño, ya que éste no se presume, se debe tener presente que la reparación de él debe ser adecuada, justa y precisa. La indemnización de perjuicios tiene un fin exclusivamente resarcitorio, en cuanto busca reparar estrictamente el daño causado. Si el Tribunal accede a peticiones como las formuladas, o siquiera a fracciones mínimas de ellas, con montos de condena superiores al importe efectivo de los supuestos daños, ello importaría un perjuicio enorme, una distorsión al sistema y una clara vulneración al derecho de propiedad y al principio de la reparación integral del daño.

Cita el artículo 2329 del Código Civil, el cual señala el principio de reparación del daño, esto es, que la indemnización debe ser medida por la magnitud del perjuicio, de manera que la indemnización debe ser concedida sólo en cuanto repare el mal causado y no en exceso, pues de lo contrario existiría un enriquecimiento ilícito. Añade que sin texto expreso en nuestro ordenamiento jurídico que se refiera al daño moral y los términos en que es indemnizable, resulta lógico que la jurisprudencia tome un rol preponderante en la integración



del concepto. Observa que la conceptualización del daño moral se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno psicológico, en fin, en la afección espiritual, los cuales deben ser indemnizados, en la medida que se encuentran acreditados.

Recalca que, para que proceda la reparación de los "daños", éstos al menos deben ser ciertos, directos y deben probarse. Así lo establece la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Que el daño sea cierto, implica que debe existir realmente al momento de exigirse la indemnización de perjuicios, no debe ser eventual; que sea directo implica que el daño debe ser una consecuencia cierta y necesaria del hecho que lo provoca, cuestión que deriva del artículo 1558 del Código Civil, y además que deba probarse no es más que una derivación del requisito establecido en el artículo 1698 del Código Civil.

Alega que las sumas demandadas son de una cuantía extraordinaria que se deben rechazar categóricamente, ya que constituyen una pretensión indemnizatoria desmesurada que por cierto no es compensatoria, sino que claramente lucrativa. Si la pretensión de la demanda se concretase, habría enriquecimiento indebido, ya que la indemnización debe guardar estricta relación con el daño producido. Esto es porque el daño es la medida de la indemnización. En este último caso, deberá probar además de la existencia de la supuesta imputación de responsabilidad, que la conducta negligente imputada es de la envergadura suficiente para considerarse acorde con la indemnización pedida. Enseguida, niega también que la suma solicitada represente una indemnización proporcional respecto del supuesto daño moral afectado.

Plantea que, no existiendo normas especiales en el ordenamiento jurídico respecto de la prueba del daño moral, para su procedencia es necesario ceñirse a las normas



generales sobre la materia. En consecuencia, para que el daño moral sea indemnizable es necesario que sea real, cierto y determinado, circunstancias que en lo absoluto concurren en la especie, aún en cuanto la contraria no justifica la suma que demanda, y los hechos que fundarían este perjuicio no corresponden a la naturaleza del mismo, siendo meridiano como se trata de fundar un concepto inexistente en miras a un enriquecimiento ilícito. Así, el daño moral debe ser acreditado en forma suficiente por la parte demandante y debe corresponder a la naturaleza de dicho perjuicio, y no otra de menor gravedad. Lo contrario daría lugar a daños punitivos, figura que nuestra legislación contempla sólo con la última reforma en la materia, pero no para los juicios individuales como el de autos. De esta manera, la estimación pecuniaria del daño debe hacerse necesariamente conforme a la prueba que conste en el proceso y no de modo discrecional.

Manifiesta que el daño moral, que afecta al ámbito extrapatrimonial, hace muy compleja su valoración económica en razón de las subjetividades tan personalísimas que rodean la experiencia del dolor y el sufrimiento. Por ello la jurisprudencia ha establecido que corresponde a la prudencia del juez determinar el monto de las indemnizaciones por este concepto. En tal sentido, el criterio que debe imperar al establecerse la cuantía de la indemnización por daño moral, debe ser aquella que no sobrepase los límites de la prudencia y la equidad.

En cuanto a los montos indemnizatorios solicitados y el abuso del derecho, considera que es total y absolutamente desmedida, artificiosa, exagerada y alejada de toda realidad, los perjuicios que se indica padecer, como la suma de dinero en la que se avalúan por la contraria. En el caso de autos, a todas luces es posible evidenciar que la actora pretende obtener beneficios



pecuniarios como resultado del litigio, toda vez que los hechos no son efectivos, como tampoco lo son los supuestos perjuicios alegados, además, porque de considerar que la actora sufrió perjuicios, la determinación de éstos debe tener cierta correspondencia lógica y ser objeto de la aplicación de algún tipo de criterio que permita establecer una suerte de "proporcionalidad" entre el perjuicio sufrido y la indemnización que se declara. Si se otorga a título de indemnización de perjuicios, la suma impetrada por la actora, sería posibilitar que aquélla sea objeto de un enriquecimiento ilícito, injusto o sin causa, institución que no encuentra amparo en nuestra ley, sino que es totalmente repudiada por el derecho, como contraria a sus valores de justicia y equidad.

Hace presente que la actora está claramente incurriendo en un "abuso del derecho", institución también erradicada de nuestro ordenamiento jurídico, ya que permite que instituciones establecidas por la ley para resguardar los legítimos intereses de ciudadanos afectados o perjudicados, sea, a raíz de interpretaciones caprichosas y arbitrarias, fuente de la obtención de beneficios particulares, carentes de fundamento lógico alguno.

Solicita en subsidio, y para el evento de que se condenase a su representada al resarcimiento de perjuicios, reducir drásticamente los montos demandados en razón de que la indemnización debe atender a una compensación de los perjuicios efectivamente causados y no a lucrar de ellos, siendo las pretensiones de la parte contraria total y absolutamente desproporcionadas, como ajenas a la realidad.

Finalmente, en lo tocante a la apreciación del daño y reducción, expresa que para el caso que el Tribunal determinara que su representada tiene alguna responsabilidad en los hechos materia de autos, cabe aplicar lo señalado en el artículo 2330 del Código Civil,



es decir, procede reducir drásticamente el monto del daño demandado. En el caso de marras, el demandante cumple con dicha hipótesis legal, ya que se habría expuesto imprudentemente al riesgo, pues, como reconoce en su demanda, habría un acto de la demandante - aunque se exprese en términos que lo disimule o disminuya - que de modo objetivo hace legítimo el procedimiento que indica se habría adoptado. Para el evento que no estime que las alegaciones y defensas configuren los requisitos para eximir completamente a su mandante de una condena civil, solicita se tengan por reiterados los mismos argumentos de manera subsidiaria, a modo que sean estimados para rebajar o distribuir proporcionalmente las causas y responsabilidades en la ocurrencia de los supuestos hechos.

Solicita tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios en contra de su defendida, rechazando la demanda en todas sus partes, con ejemplar y expresa condena en costas. En subsidio, para el evento de que se condenase a su representada al resarcimiento de perjuicios, solicita se declare que su obligación es simplemente conjunta, respecto de la codemandada Liderman SpA., y en todo caso, rebaje drástica y prudencialmente todos los montos y conceptos demandados, eximiéndola del pago de costas.

A folio 35, se tuvo por contestada la demanda, en rebeldía de la demandada principal, Liderman SpA.

A folio 36 la parte demandante procedió a evacuar el trámite de **réplica**, hace presente que la demandada Tottus pretende eludir su responsabilidad de supervigilancia que le compete para con aquellas empresas que prestan servicios al interior de sus locales, además no ha desconocido la existencia del vínculo comercial con la codemandada Liderman.



Esgrime que la razonabilidad en el acto culposos ejecutado por la codemandada Liderman, queda de manifiesto de los propios hechos demandados y que acreditará en la etapa procesal respectiva. En efecto, determinada acción puede ejecutarse de buena o mala fe y para ello se deberá estar a los elementos objetivos que rodean la acción principal, y en este sentido resultan relevantes las características del actuar de la empresa Liderman, como asimismo los protocolos que puedan existir. En tal sentido, explora que si un individuo va a comprar equis producto pero además alguno de sus hijos haya echado algún otro producto del cual no se percata, y traspasa la línea de cajas "ni siquiera haber salido del lugar" y los guardias lo detienen y no escuchan ninguna explicación, lo someten, lo encierran hasta la llegada del personal policial, dicho actuar es legal o proporcionado al hecho. Un caso más concreto; un cliente compra (paga) más de 200 mil pesos en productos y por equis motivo hay 10 mil pesos que quedaron pendientes de pago, tal hecho es motivo para que el personal actúe con las energías posibles, sin preguntar cuáles fueron los hechos, ni siquiera requerir la boleta de compra. Concluye que es evidente que en el actuar de toda persona se debe velar por el respeto a las garantías constitucionales, siendo unas de las principales el respeto a la integridad física y psicológica, debido proceso, y a ser tratado como inocente, y en tal sentido, tal postura impide tratos vejatorios que atenten con la dignidad de toda persona.

Luego a folio 38 la parte demandada solidaria **Hipermercados Tottus S.A.** evacuó el trámite de la **dúplica**, reiterando lo ya expresado en su contestación.

Seguidamente consta a folio 45, se celebró la audiencia de conciliación con fecha 7 de febrero del presente año, la que se desarrolló con la sola



comparecencia del apoderado de la parte demandante. Llamadas las partes a conciliación, atendida la inasistencia indicada, ésta no se produce.

A folio 46 se recibió la causa a prueba, siendo posteriormente modificada a folio 56, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, rindiéndose la prueba que consta en autos. Y a folio 96 se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DOCUMENTAL OPUESTA POR LA DEMANDADA SOLIDARIA A FOLIO 70.

PRIMERO: Que la parte demandada solidaria procedió a objetar los documentos acompañados por el actor a folio 67, falta autenticidad conforme a lo predicado por el artículo 17 inciso segundo del Código Civil, y conforme predica el artículo 346 N°3 de nuestro Código Adjetivo, ya que son documentos editados o sacados de contexto. Además, tal y como puede apreciarse, ellos pueden ser manipulados o acomodados, de tal forma que calcen en la historia y teoría del caso planteada por el actor, tal como puede desprenderse del informe psicológico acompañado. Añade que, de ello se sigue, que carecen de mérito legal, no bastándose a sí mismos. Además, los documentos números 2 y 4, son documentos totalmente ilegibles, por tanto, podría hacerse calzar con la teoría del caso, y en caso alguno representan una prueba irrefutable de las pretensiones de aquélla, muy por el contrario, es una manifestación de su postura procesal, que deberá ser refrendada con los demás medios probatorios que franquea la ley para formar la convicción del Tribunal, debiendo acreditar el vínculo de causalidad entre éstos, los hechos descritos en sus acciones, y la prueba que rinda al efecto.

SEGUNDO: Por su parte, la demandante no evacuó el traslado conferido.



TERCERO: Que las causales de impugnación de los documentos son la falsedad o la falta de integridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y las alegaciones realizadas por la demandante dicen relación con el valor probatorio que debiese otorgarse a los instrumentos privados acompañados por el demandado, cuestión que al Tribunal le corresponde determinar en esta sentencia, ponderando el valor probatorio de cada uno de ellos, tratándose de una facultad privativa. Además, del análisis de la documentación acompañada, no se vislumbra que incurran en las falencias alegadas, puesto que si bien están digitalizados de manera irregular, es posible observar su contenido. En consecuencia, se rechazará la impugnación formulada por la parte demandante, tal como se indicará en lo resolutivo del fallo.

II.- EN CUANTO A LA INHABILIDAD FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA SOLIDARIA RESPECTO DE LA TESTIGO, DOÑA KEILLY YURIANA LLACTA RONCEROS, A FOLIO 66.

CUARTO: Que la parte demandada solidaria tachó a la testigo antes individualizada, por la causal establecida en el artículo 358 N°7 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que dice tener una relación cercana de amistad a la señora, de acuerdo a sus respuestas.

QUINTO: Que, por su parte, la demandante evacuó el traslado conferido, solicitando que se rechace, porque la testigo nunca señaló que tenía un vínculo de amistad o enemistad con la demandante, respondió ser clienta del local de la demandante, y en esas circunstancias de hecho es que la conoce.

SEXTO: Que las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, pretenden resguardar la imparcialidad que debe tener el testigo al momento de declarar en juicio. Que la causal



esgrimida dice relación con quienes tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. Y, de acuerdo con lo dispuesto en el N°7 segundo párrafo del artículo 358 del citado cuerpo normativo, la amistad o enemistad deberá ser manifestada por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias, la que se no colige con ese carácter de lo señalado por la deponente, razón por la cual se rechazará la inhabilidad en los términos solicitados, tal como se dispondrá en lo resolutive de esta sentencia.

III.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA:

SÉPTIMO: Que en autos ha comparecido doña Isabella Bravo Pérez, abogada, en representación de doña **Elva Nelly Layza Blas**, quien interpuso demanda de indemnización de perjuicios en Juicio Ordinario, en contra de **Liderman SpA.**, y solidariamente en contra de **Hipermercado Tottus S.A.**, fundada en los eventuales perjuicios sufridos por la actora a raíz de los hechos denunciados y supuestamente ocurridos con fecha 20 de junio de 2022 a las 10:30 horas en las dependencias del supermercado Tottus Antofagasta, ubicado en calle Condell N°2639, de esta ciudad. Donde la demandante luego de realizar una compra de mercadería, fue retenida por funcionarios de seguridad del recinto, ya que existía una divergencia entre la cantidad y el valor efectivamente pagado por un tipo de producto. Indica que la actora fue, recién luego de tres horas, puesta a disposición de funcionarios policiales, alegando malos tratos de parte de los guardias de seguridad. Demanda la responsabilidad, tanto por los agentes de la empresa de seguridad, como respecto de la empresa de Hipermercado, en base a la solidaridad esgrimida.

Solicita se declare que: 1.- Los demandados han inferido daño a su representada, como consecuencia de un mal y erróneo procedimiento de seguridad practicado por los



guardias privados de seguridad, resultando en agresiones físicas y verbales, apremios ilegítimos, afectando en proporciones su dignidad, su honra, su libertad, y su imagen; 2.- Que con cargo a dicho daño procede indemnización de perjuicios en favor de su mandante en la forma de daño moral por la suma de \$35.000.00.- o la suma que el tribunal estime pertinente fijar; 3.- Que las sumas referidas en el N°2 anterior, deben pagarse reajustadas con la variación del Índice de Precios al Consumidor o el índice que lo reemplace, entre la fecha de la dictación de la sentencia de primera instancia y el pago efectivo, o el reajuste y fechas que S.S. estime conforme al mérito de autos; y 4.- Que la sociedad demandada debe pagar las costas de la causa.

OCTAVO: Que la demandada principal se encontró en rebeldía durante toda la secuela del juicio.

NOVENO: Que, a su turno, compareció don Héctor Solano Pironi, abogado, por la demanda solidaria **Hipermercados Tottus S.A.**, quien, en primer lugar, controvirtió los argumentos fácticos desplegados en el libelo, luego critica el régimen de responsabilidad esgrimido, calificándolo como complejo y que no existiría la solidaridad esgrimida respecto de su defendido. Seguidamente, alega la inexistencia de algún actuar ilícito desplegado por la demandada, que no existe legitimación pasiva de su cliente para ser emplazado, ni se cumple con el vínculo de causalidad. Agrega que el actor deberá acreditar sus alegaciones mediante los medios probatorios que franquea el legislador, que los daños demandados no son tales, la indemnización solicitada resulta excesiva, alejándose del carácter resarcitorio que debe tener, exigiendo en consecuencia su rechazo o en su defecto la reducción sustancial de los montos demandados.



DÉCIMO: Que, con la finalidad de acreditar sus asertos, la parte demandante se valió de los siguientes medios de prueba:

I.- DOCUMENTAL:

1.- Copia documento titulado "Cesión de derechos y modificación de sociedad comercial, Sociedad comercial e inversiones F & L Limitada, Puro Sabor Ltda. o Comercial F L Ltda.", de fecha 21 de marzo del año 2014, repertorio N°897/2014, suscrito ante Notario Público (S) doña Catalina Herrera Reyes de la 3° Notaría de Antofagasta.

2.- Set compuesto por fotografías correspondientes a cinco boletas emitidas por Hipermercado Tottus S.A., poco legibles, de distintos montos, en los meses de abril, mayo y junio del año 2022, apareciendo como compradora doña Elva Layza Blas, Sociedad Comercial F & L Ltda.

3.- Copia factura electrónica N° 8656072, emitida por Hipermercados Tottus S.A., de fecha 20 de junio del 2022, por la suma de \$156.254.-

4.- Copia certificado de vigencia, correspondiente a Sociedad Comercial e Inversiones F & L Limitada, emitido con fecha 18 de mayo del año 2023, por el Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, Registro de Comercio.

5.- Copia documento titulado "Informe Psicológico", emitido por doña Jiska Esquivel Jamett, Psicóloga - Perito ICA Antofagasta, fechado en el mes de enero del año 2023.

II.- TESTIMONIAL:

A folio 66 de estos autos, compareció doña Keilly Yuriana Llacta Ronceros, quien debidamente juramentada declaró respecto del punto de prueba N°1, que el año pasado en tiempo de pandemia fue a comprar leche y comida de perro, observó bulla y escándalo, ve a tres guardias que gritaban que la señora había robado, y se percata que era doña Elva, la señora del local Puro Sabor. Agrega que se quedó asombrada, porque consume en su restaurante, y le



pareció raro, porque la gente gritaba peruana ladrona, siendo que la señora tiene un local, y no tiene la necesidad de robar.

Repreguntada, expone que sí, efectivamente los guardias eran del Supermercado Tottus, tres en total. Los que además insultaron a la señora Elva, luego solo pudo observar que la llevaban por unos pasillos, pero más no, ya que no la siguió.

Contrainterrogada, indica que lo anterior le consta debido a que había asistido a comprar ese día al mismo supermercado y vio todo lo que pasó. Luego, responde que vio a los guardias de seguridad, había bastante gente, además de un señor encargado del Tottus, de chaleco, pero eran del Tottus, ya que siempre va a comprar ahí y se conocen.

Al punto de prueba N°3 comentó que fue a comer al restaurante donde ve a la actora, y le contó que fue un tema de robo, le indicó que la tuvieron horas, la llevaron Carabineros, ella le conversa y le dice que está en temas judiciales, y le ofreció ir a testificar. Seguidamente, repreguntada, alude que la demandante le dijo que los guardias del Tottus habían sido injustos, no le habían dejado explicar del Boucher de la compra, no la escucharon, y la arrestaron por robo, y que estaba con terapia psicológica por la vergüenza que había pasado.

Contrainterrogada, sostiene que no logró ver específicamente la mercadería que llevaba, solo observó cuando los guardias la tenían ahí y la gente gritando. Cuando fue al local, le preguntó a doña Elva, y le dijo que había ido a hacer compras, varias veces la ha encontrado haciendo compras en el Tottus, después le explicó que fue por arroz o algo así.

Al punto de prueba N°4, indica que sí hubo daño por los insultos, la vergüenza que sufrió, la decían peruana



ratera, devuelva las cosas. Complementa que doña Elva estuvo con tratamiento psicológico, porque es lo que le contó su familiar, y lo que le confesó ella también por la vergüenza que había pasado. Cuando conversó con ella pudo observar que se quebró, lloró, derramó lágrimas y tenía vergüenza. Finalmente, añade que ha podido ver que sí ha sufrido daño moral, porque no es fácil pasar esa situación, y ella se quiebra, llora, siente que es difícil la vergüenza.

Seguidamente, compareció doña Guadalupe Cerezo Cuellar, quien debidamente juramentada, declaró respecto del punto de prueba N°1, que vio a la demandante quien fue apresada. Precisa que se encontraba cerca, comprando unos electrodomésticos, vio que le hablaban, luego observó que vinieron tres guardias de seguridad y le decían que mantenga la calma, que no pusiera resistencia, pero ella estaba absolutamente tranquila. Le sorprendió que la estuvieran tratando así, ya que frecuenta mucho el Tottus. Conoce esto porque es cliente frecuente de su restaurante, le sorprendió que la acusaran injustamente. Repreguntada, aclara que vio cómo la esposaron y también a la encargada, que le dijo que era una peruana ladrona, lo que no le gustó porque como inmigrante se sintió identificada. Le consta que dicha persona era dependiente de Tottus, ya que la cajera la llamó como encargada, además llevaba en el cuello una identificación que decía Tottus. Luego, expresa que ese día no tenía muy claro lo que estaba pasando, pero entendió que por equivocación le cobraron un solo paquete, pero llevaba 11 paquetes de arroz, por eso fue que se produjo el problema.

Contrainterrogada, aclara que, tanto la encargada de Tottus como los guardias la trataron como "peruana ladrona", además tuvo conocimiento de los hechos por lo que pudo observar en el lugar, y por lo que doña Elva le



comentó. Finalmente, declara que los guardias fueron quienes la apresaron, pero desconoce a dónde la llevaron.

Al punto de prueba N°3, indica que el trato recibido por la demandante no fue adecuado, siendo una cliente frecuente es raro que haya sucedido algo así, y que hay personas que roban ciertas cosas y la trataron igual que a cualquier otro delincuente. Reitera que en el momento se encontraba la cajera, quien esperó hasta que llegara la encargada.

Contrainterrogada, expresó que el motivo de la detención de doña Elva, fue que no canceló la cantidad que era, por la equivocación que tuvo la cajera. Además, que no recuerda muy bien las mercaderías que llevaba, pero sabe que eran paquetes de arroz, aceites, y otras cosas más. En cuanto al arroz, responde que la actora pagó solo uno y la acusaron de haber robado el paquete, siendo que esto se debió a un error de la cajera, y porque siempre que uno compra un paquete saca uno de los productos para pasar por la máquina.

Al punto de prueba N°4, alude que sí es efectivo, tiene conocimiento que ella estaba viendo a un psicólogo durante varias semanas, ella estaba mal. Agrega que la metieron en el mismo lugar que a doña Elva, y claramente puede entender lo que ella estaba sintiendo.

Repreguntada, plantea que la demandante se vio afectada por el actuar de la encargada y los guardias, porque empezaron a decir que era una ladrona, además algunos clientes también estaban cerca de ella, y eso le afectó mucho. Luego, contesta que a doña Elva la llevaron a un lugar oscuro y sucio, para luego transportarla a la Comisaría.

Contrainterrogada, plantea en cuanto al daño moral, que, se circunscribe a la afectación de su integridad como persona, porque no es una ladrona, es una persona



trabajadora que siempre la ve laborando honradamente. En lo que respecta al periodo de tiempo que estuvo detenida en dependencias del Supermercado, responde que no sabe muy bien, pero estima que una hora o una hora y media.

DÉCIMO PRIMERO: Que la parte demandada principal Liderman SpA., atendida su rebeldía, no allegó medio de prueba alguno.

DÉCIMO SEGUNDO: Que la parte demandada solidaria Hipermercados Tottus S.A., tampoco rindió medios de prueba.

DÉCIMO TERCERO: En primer lugar, se procederá al análisis de la responsabilidad asignada a la demandada principal Liderman SpA., sustentada en el supuesto actuar desproporcionado e irracional en que incurrieron los guardias de seguridad el día 20 de junio del año 2022, en la detención de la demandante.

Del mérito de los antecedentes que obran en autos, la prueba documental rendida y restantes medios probatorios allegados, se desprende que el demandante ha interpuesto demanda de indemnización de perjuicios en sede de responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno, en contra de la empresa de seguridad reseñada, a razón actos desplegados por sus dependientes.

Por su parte, el artículo 2320 del Código Civil prescribe "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

Así los progenitores son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso. Pero cesará la obligación



de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho". Por su parte el artículo 2322 del citado cuerpo normativo mandata "Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista.

Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes".

De la normativa previamente transcrita, se extrae el régimen conceptualizado como de responsabilidad por el hecho de terceros dependientes, aunque se trata más bien de una presunción de responsabilidad que le pesa a una entidad por el actuar de sus dependientes. Siguiendo al profesor Hernán Corral Talciani, "La atribución de responsabilidad se fundamenta en el deber de vigilancia o en el deber de correcta selección que tienen ciertas personas respecto de otras. Por tanto, no se responde sólo por la culpa ajena, sino también por la propia, que consiste en la falta de esos deberes (culpa in vigilando y culpa in eligendo) y que permite el desplazamiento de la culpa desde el agente directo al tercero responsable, pero que no permitirían encausar directamente al principal, ya que faltaría el nexo causal entre una culpa in eligendo o in vigilando y el daño producido por el dependiente. De allí que se haya sostenido que el principal es un deudor sin responsabilidad, ya que el único responsable es el dependiente. Esto es equivocado, pues ambos son responsables, aunque por atribuciones de responsabilidad diferentes: el dependiente por su culpa



directa, y el principal por haber posibilitado dentro de la esfera de sus atribuciones que por intermedio de un agente suyo se cause un daño a la víctima". En otras palabras nos encontramos ante una doble imputación, ya que, por un lado, existe la posibilidad de perseguir al dependiente en razón de su propia culpa, y por otra, al tercero responsable por su negligencia en la elección, vigilancia o control del actuar de dicho dependiente.

DÉCIMO CUARTO: Tanto la doctrina nacional mayoritaria, como jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia han señalado que para que se dé esta presunción, deben cumplirse los siguientes requisitos: 1.- Capacidad delictual del tercero civilmente responsable; 2.- Comisión de un hecho ilícito dañoso por parte del dependiente; 3.- Capacidad delictual del autor material del daño; 4.- Prueba de la responsabilidad del subordinado o dependiente; y 5.- Vínculo de subordinación o dependencia entre el responsable y el autor material del daño.

En cuanto al primer presupuesto, al tratarse de una persona jurídica, y a falta de alegación alguna en contrario, se tendrá por cumplida su capacidad delictual para ser sujeto pasivo de la acción incoada.

Respecto al segundo requisito, resulta pertinente tener presente lo establecido por el artículo 1698 del Código Civil "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta", determinando así la regla general en materia probatoria, en consecuencia, recaerá el peso o la carga de acreditar una determinada situación fáctica a quien alegue su existencia. Será necesariamente el actor el llamado a acreditar la comisión de este hecho ilícito por parte del dependiente. Si bien no resulta indispensable la individualización precisa de los trabajadores responsables por el actuar, sí es imprescindible lograr constatar la existencia de este



ilícito civil, en otras palabras, se debe observar con meridiana claridad la concreción del hecho doloso sufrido por la víctima.

De la prueba documental debidamente acompañada y no objetada de contrario, sumada a la declaración de los testigos reseñada en extenso supra, es posible colegir lo siguiente:

1.- Doña Elva Nelly Layza Blas posee el cincuenta y dos por ciento de los derechos de participación en cuanto a capital, respecto de la empresa Sociedad Comercial e Inversiones F & L Limitada o "Puro Sabor Ltda.", y dicha empresa, al menos al 18 de mayo del año 2023, se encontraba vigente.

2.- Además, durante los meses de abril, mayo y junio del año 2022, la actora concurrió a Hipermercado Tottus S.A., local N°502 Antofagasta-Centro, ubicado en calle Condell N°2639 de esta ciudad, oportunidades en las que realizó la compra de diversas mercaderías, en las que se incluyen paquetes de arroz, variando en cada oportunidad la cantidad, entre 14 a 20 unidades.

3.- Que con fecha 20 de junio del año 2022, la demandante se apersonó al local antes indicado, figurando compra de mercaderías a las 11:56:04 horas, entre las que se encuentra la de un paquete de arroz por la suma de \$2.521.-.

4.- En dicha oportunidad, fue retenida por personal de seguridad que prestaba funciones en el supermercado en cuestión. En dicho procedimiento se le imputó la comisión del delito de hurto, y además la actora fue objeto de insultos relacionados con su nacionalidad. Posteriormente, fue derivada a un lugar apartado del público general, a la espera de la llegada de Carabineros de Chile.

DÉCIMO QUINTO: De la prueba reseñada en el considerando décimo y de los hechos que se han tenido por



acreditados según se constató previamente, es posible colegir que la actora, al menos dos meses antes de los hechos denunciados, realizaba compras regulares de distintos bienes, entre los que se encontraban paquetes de arroz, cuya cantidad variaba de entre 14 a 20 paquetes. Que el día 20 de junio del año 2022, aparece en la boleta ya indicada, el cobro de un único paquete de arroz, por lo que es posible presumir que existió una disconformidad entre los paquetes efectivamente pagados y aquellos que se encontraban en su poder al momento de intentar hacer abandono del recinto, lo que igualmente ha sido reconocido por la actora.

Ahora bien, respecto a la calificación del actuar del personal de seguridad dependiente de la demandada principal, se observa como desproporcionado y carente de racionalidad, ya que al tratarse de un cliente habitual, por la cantidad de mercancías que regularmente compraba, las que efectivamente había comprado dicho día y por su conocido rubro laboral, hacían presumir fundadamente que se trataba de un error de cobro de la cajera que realizó la atención.

Por otra parte, resulta necesario hacer presente que en autos no se ha logrado acreditar el lugar exacto al que fue llevada la demandante luego del apresamiento, como tampoco el periodo de tiempo en que estuvo a la espera de la llegada del personal policial. De igual modo, no se acompañó prueba alguna dirigida a corroborar el estado de salud de la actora, o al procedimiento policial llevado con posterioridad. En este sentido, las alegaciones vertidas sobre estos puntos en el libelo, consisten en meras aseveraciones que no van acompañadas de medios probatorios, por lo que carecen del grado de convencimiento suficiente para ser oídos, siendo así necesariamente serán descartados como parte de la acción dañosa alegada.



En definitiva, solo se ha logrado constatar un apresamiento injustificado sufrido por la actora a manos de los guardias de seguridad dependientes del demandado principal.

DÉCIMO SEXTO: En lo tocante al tercer elemento, si bien es cierto el sujeto activo no rindió prueba en este sentido, tampoco existen alegaciones que contradigan la existencia de plena capacidad de los dependientes, sumado al hecho de que se trataba de guardias de seguridad, quienes debían contar con la respectiva capacitación, lo que hace presumir la concurrencia de este requisito.

Respecto al presupuesto relativo a la culpa o dolo del dependiente, es posible extraerlo a partir de las declaraciones de los testigos rendidos en autos, ya que se trata de testigos presenciales de los hechos, quienes dieron razones sobre sus dichos en torno a la forma en cómo percibieron los sucesos, el modo en que ocurrieron, y asignando como perpetradores a los guardias de seguridad que participaron del proceso de detención.

Finalmente, en lo que respecta a la relación de subordinación y dependencia, nuevamente es a partir de la prueba testimonial rendida, que se constata la presencia de guardias de seguridad en el momento de la detención, quienes fueron sindicados como prestadores de servicio en el recinto de supermercado en cuestión, por lo que necesariamente existe entre los dependientes y la empresa demandada dicha vinculación, ya que esta última tiene tanto el deber de elegir a personal idóneo, además de vigilar y corregir su desempeño. Con esto, se cumplen todos y cada uno de los requisitos necesarios para la concurrencia de responsabilidad por el hecho ajeno en contra de la demandada principal, ya que era precisamente la obligada a cumplir con el deber de vigilancia requerido.



DÉCIMO SÉPTIMO: En lo tocante a la responsabilidad alegada respecto de la demandada solidaria Hipermercado Tottus S.A., se ha discutido si la obligación entre el dependiente autor directo del ilícito y el tercero civilmente responsable, es solidaria o simplemente conjunta. Alessandri ha sostenido que "no procede la solidaridad, ya que la víctima tiene dos responsables, a los que puede demandar separada o conjuntamente por el total del daño". En este sentido, se ha pronunciado parte de la jurisprudencia, cuando se demanda con fundamento en el artículo 2320, "sí puede demandar primero a uno de los responsables; y en el evento de no tener éxito, hacerlo con el otro; pero en caso alguno a ambos conjuntamente por el total de la obligación; porque ello imputa ejercer una facultad inherente a la solidaridad pasiva, que en la presente situación el precepto mencionado no autoriza".

Siguiendo nuevamente a Corral, no se trata propiamente de una obligación solidaria, que no procede a falta de texto legal expreso. No hay una obligación con pluralidad de sujetos, sino dos obligaciones, si bien ambas tienen por objeto la satisfacción del mismo interés (la reparación del daño). No es pues una obligación solidaria, sino varias obligaciones concurrentes. Como las acciones para exigir las emanan de los mismos hechos, procede su acumulación, y la sentencia podrá condenar al pago a ambos demandados por el total de los perjuicios. El demandante, al ejecutar la sentencia pedirá el pago a uno de ellos, y si éste satisface el total no podrá demandar al otro, ya que de lo contrario obtendría una doble indemnización. Si quien paga es el autor directo, nada podrá reclamar al principal; al revés, si paga el principal, tiene acción para pedir el reembolso de todo lo pagado al directamente responsable. En consecuencia, la demanda interpuesta se encuentra mal planteada, en lo que respecta a la solidaridad alegada en



contra de Hipermercado Tottus S.A., bastando este equívoco para rechazar el libelo en lo que resulte atingente.

A mayor abundamiento, los actores aludidos como ejecutores del actuar ilícito, son asociados como dependientes de la demandada principal, y no existe vinculación alguna para con Tottus S.A., además no se ha logrado acreditar bajo ningún respecto que la empresa de supermercado tenga alguna facultad de dirección o corrección por sobre dichos trabajadores de seguridad, por lo que no resulta atingente hablar de algún deber de vigilancia vulnerado. El hecho de que presten los servicios en sus dependencias no resulta suficiente para construir el vínculo de subordinación y dependencia. Habida cuenta lo argumentado, no cabe más que rechazar la demanda interpuesta en este acápite, tal como se indicará en lo resolutivo de la presente sentencia.

DÉCIMO OCTAVO: En lo que respecta a los daños demandados, se circunscribe a un perjuicio de carácter moral, el que valoriza en la suma de \$35.000.000.- de pesos.

El daño moral, tradicionalmente se ha conceptualizado como la molestia o dolor, no apreciables en dinero; el sufrimiento moral o físico que produce un determinado hecho. La indemnización del daño moral sería la determinación del *pretium doloris*, en palabras de Díez-Picazo, "El daño moral es el sufrimiento o aflicción psicológica que lesiona el espíritu y se manifiesta en dolores e inquietudes espirituales y pesadumbres".

Por otra parte, en la doctrina moderna, el concepto de daño es reformulado, superando así la noción del precio del dolor, para dar cabida a otras facetas de perjuicios. Siguiendo al profesor Hernán Corral, daño moral es todo daño no patrimonial, capaz de comprender otros menoscabos que no admiten apreciación pecuniaria directa como, por



ejemplo, el daño corporal o biológico, el daño a derechos de la personalidad, el perjuicio estético o la pérdida del gusto vital. Aunque se ha propuesto sustituir la denominación por inexacta, se sigue hablando de daño moral para aludir a cualquier daño de naturaleza extrapatrimonial. Por su parte, Carmen Domínguez señala que puede concebirse el daño moral en el sentido más amplio posible, incluyendo todos los daños a la persona en sí misma o a sus intereses extrapatrimoniales.

Nuestra Excelentísima Corte Suprema ha resuelto, "Que en cuanto al daño moral entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto afecta la integridad psíquica de un individuo y que se traduce en el agobio que genera el haber sufrido una lesión considerable y el riesgo para su vida que ello representó, no requiere de prueba. En cuanto a su valuación señala que debe hacerse conforme a la prueba tasada o legal y a la apreciación prudencial del sentenciador, lo que es distinto a la afirmación de que el daño moral requiere prueba".

Sin perjuicio de lo indicado, la prueba del daño moral impone ciertas restricciones, en ese sentido y normalmente el mismo no puede ser objeto de una prueba directa, pero sí por presunciones.

DÉCIMO NOVENO: Que la actora, con el objeto de acreditar la existencia de la tipología de daño demandada, acompañó el siguiente documento titulado "Informe Psicológico", emitido por doña Jiska Esquivel Jamett, Psicóloga - Perito ICA Antofagasta, fechado en el mes de enero del año 2023, el que no fue objetado de contrario, y en su apartado conclusiones expresa: "Atendido a los resultados obtenidos en la presente evaluación, es posible concluir que la evaluada, doña Elva Layza, ha experimentado evento que se enmarca en la experimentación traumática, sosteniendo diversos niveles de sintomatología en el



periodo posterior a su ocurrencia (6 meses), observándose progresivamente merma y restablecimiento de funcionalidad, sin perjuicio de lo anterior se mantienen a la fecha presencia y cumplimiento de criterios clínicos considerarse concordantes con la definición de Trastorno por estrés postraumático, atendido a que los niveles de afectación/alteración se originan a razón del evento precipitante ocurrido en el mes de junio del año 2022 (...) La alteración/afectación que implicó para la evaluada, doña Elva Layza, se inicia con el evento antes señalado, esto podría categorizarse en niveles de gravedad leves a moderados y abarcando áreas laborales, atendido que al encontrarse detenida no pudo concurrir a desempeñarse laboralmente aquel día, viéndose afectada en días consecutivos dada la presencia de la sintomatología, incluso en la actualidad se advierte algún nivel de afectación atendido que debe concurrir con frecuencia de 8 veces al mes al supermercado, implicando ello reactivación de síntomas fisiológicos y psíquicos. Igualmente a nivel social, conforme expone la evaluada y es contrastado en la presente evaluación, se advierte un deterioro de su capacidad social, mostrándose mayormente aislada a partir del evento, evitando sostener o exponerse con otros/as personas".

Luego, el informe concluye lo siguiente: "Por cuanto, se concluye que podría existir una relación directa entre los resultados obtenidos en la presente evaluación y la experiencia vivida por la evaluada, advirtiéndose en ello al menos niveles leves a moderados de interferencia o afectación de su funcionalidad global y que no se explicaría por otras condiciones ambientales o individuales de la evaluada".

Además, constan declaraciones de dos testigos ya transcritas en los considerandos que anteceden, quienes



alegaron haber presenciado los hechos, dieron razones sobre sus dichos, circunstanciaron lo ocurrido, y además se refirieron expresamente a la afectación sufrida por la actora en su esfera psicológica, manifestando un alterado estado de ánimo, viéndose muy compungida y avergonzada por lo ocurrido. Lo anterior, conlleva necesariamente a una afectación en el regular y normal desenvolvimiento de un individuo en su vida y actividad cotidiana, lo que trae aparejado un perjuicio de índole moral, en su esfera interna y en la psiquis de la actora. Siendo así, resulta posible presumir fundadamente, en los términos de lo establecido por el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 1712 del Código Civil, con caracteres de gravedad, concordancia y precisión suficiente, que efectivamente la demandante ha sufrido dolor, aflicción en su esfera psíquica, en sus sentimientos, o una alteración en su vida diaria.

VIGÉSIMO: En cuanto al *quantum* de dicho daño, como lo señala el profesor Enrique Barros Bourie en su Tratado de responsabilidad extracontractual, "La valuación del perjuicio afectivo presenta dificultades generales de valuación del daño, en cuanto a la subjetividad de la valuación, el carácter punitivo de la indemnización y la ausencia de criterios formales o informales que permitan una comparación objetiva de las sumas asignadas a título de indemnización".

Corresponde, en definitiva, determinar prudencialmente el daño por los jueces del fondo, y en la especie, para dicho efecto, es preciso tener presente, entre otros factores, la gravedad y extensión de este daño, materia que se configura a partir de la prueba documental y testimonial ya aludida latamente, el sufrimiento y descrédito cierto ocasionado por un suceso como el ocurrido.



VIGÉSIMO PRIMERO: En virtud de estas conclusiones, se considera como una indemnización compensatoria justa, en cuanto del daño moral experimentado, la suma total de \$1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) en favor de doña Elva Layza Blas, la que se estima suficiente para resarcir el daño sufrido, y que deberá pagarse incrementada con los intereses corrientes para operaciones de dinero no reajustables a contar de la fecha de esta sentencia y hasta el día del pago efectivo, sin reajustes.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el resto de la prueba rendida y no pormenorizada en lo que antecede, en nada altera lo resuelto precedentemente.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, habiendo sido completamente vencido el demandado principal, se le condenará en costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 161, 162, 170, 254, 341, 342, 346, 358, 426 y 433 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1698, 1712, 2314, 2320 y 2322, **se declara:**

I.- Que **se rechaza** la objeción documental opuesta por la demandada solidaria a folio 70.

II.- Que **se rechaza** la inhabilidad formulada por la parte demandada solidaria, respecto de la testigo doña Keilly Yuriana Llacta Ronceros, a folio 66.

III.- Que **se acoge, con costas**, la demanda deducida por doña Isabella Bravo Pérez, abogada, en representación de **Elva Nelly Layza Blas**, y en consecuencia se condena únicamente a la demandada principal **Liderman SpA.**, a pagar al demandante la suma de **\$1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos)**, y **se rechaza** en lo restante.

IV.- Que la suma antes referida deberá liquidarse en su oportunidad e incrementarse con los intereses corrientes para operaciones de dinero no reajustables a contar de la fecha de esta sentencia y hasta el día del pago efectivo, sin reajustes.



Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-1702-2022

Dictada por **Andrea Ingeburg Przybyszewski Jopia**, Jueza Suplente.

En Antofagasta, a dos de febrero del año dos mil veinticuatro, se anotó el presente fallo en el estado diario, de conformidad con lo prevenido en el artículo 162 inciso final del Código de Procedimiento Civil.



